

C.A. de Concepción

Concepción, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Se reproduce la sentencia definitiva en alzada a excepción de los considerando 29°, 31°, 32°, 33°, 35° que se eliminan.

Y TENIENDO, EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE:

I.- En cuanto a la apelación de la parte demandada:

PRIMERO: Que, en estos autos se han alzado ambas partes en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, solicitándose en el caso de la demandada –Fisco de Chile- la revocación de la misma en cuanto acogió la demanda, para que en su lugar se declare que la referida demanda de indemnización de perjuicios queda rechazada en todas sus partes, con costas; en subsidio, para que se rebaje el monto de la indemnización fijada, a la suma menor de la señalada por el a quo, que esta Corte determine, pidiendo también que se corrija lo referido a los reajustes e intereses otorgados.

SEGUNDO: Que, habiéndose rechazado en la sentencia apelada la excepción de falta de legitimidad activa por cuanto se estimó - según se ve del motivo 10° y 11° de ella- que los certificados acompañados, sin objeción de la contraria, eran suficientes para acreditar la calidad de víctimas indirectas de los demandantes, argumentos que esta Corte comparte, son suficiente para rechazar la excepción opuesta por el Fisco.

TERCERO: Que, en lo que dice relación con la ahora examinada apelación del Fisco de Chile demandado, esta Corte comparte los razonamientos y las conclusiones a que arriba el sentenciador de primera instancia, en lo que concierne a las siguientes cuestiones materia de la apelación.

En efecto, no resulta posible aceptar las excepciones de pago y de prescripción de la acción civil opuestas, así como la de reparación



satisfactiva o pago, planteada en relación a la fijación del daño moral por los hechos de autos, fundadas en haberse otorgado beneficios pecuniarios que conceden las Leyes N° 19.123 y N° 19.992, por cuanto aun en el evento de haberse concedido las prestaciones allí aludidas, las mismas no son incompatibles con la indemnización de perjuicios por daño moral que se pretende en autos. En las citadas leyes en parte alguna se estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorgan y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, por lo que no existe motivo para presumir que dichos estatutos se dictaron con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de violaciones de derechos humanos. A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes singularizadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral. Así se ha resuelto reiteradamente por la Excelentísima Corte Suprema (véase, al efecto, entre otras, las sentencias dictadas en Rol N° 9755-15 de 21 de junio de 2016; Rol N° 24045-15 de 6 de septiembre de 2016; Rol N° 15298-18 de 19 de diciembre de 2018; Rol N° 15402-18 de 21 de febrero de 2019; Rol N° 16950-19 de 9 de diciembre de 2019; y, Rol N° 36905-19 de 16 de junio de 2020).

En concepto de estos sentenciadores los beneficiarios de pensiones reparatorias no se encuentran impedidos de impetrar una indemnización por el daño moral ocasionado por un hecho constitutivo de violación de sus derechos humanos o del que fueran víctimas por repercusión, en la medida que por aplicación del principio de reparación integral del daño, el resarcimiento del daño moral, por un lado, no está directa y concretamente comprendido en aquellas reparaciones; y, por otro, como una consecuencia de ello, es de toda evidencia que puede impetrarse separadamente, y si bien pudiere entenderse que las Leyes N°19.123 y N°19.992, al regular los



beneficios de las personas afectadas por vulneración de derechos humanos, fijó de dicho modo los únicos daños indemnizables, con exclusión de otros, lo cierto es que de frente a esta dicotomía (aparente) ha de preferirse la normativa internacional que no limita el aludido principio de reparación integral del daño –aplicando al efecto el principio pro homine que debe presidir toda interpretación en materia de derechos humanos-, y, en virtud del mismo, privilegiarse así la interpretación que conduce a admitir, sin exclusiones, la reparación del daño moral, como ha acaecido en el caso en comento, por sobre otros criterios de orden económico.

CUARTO: Que, además, debe tenerse en consideración que la Ley N°19.123 –que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación-, al establecer la pensión de reparación en beneficio de las víctimas de derechos humanos y al otorgar en su favor otras prestaciones, en ninguna parte asentó una incompatibilidad de estos beneficios con eventuales indemnizaciones que pudieren perseguirse ante los Tribunales de Justicia, y, a diferencia de esto, dejó en claro que las funciones asignadas a dicha Corporación no dicen relación con las jurisdiccionales que les corresponden en forma exclusiva y excluyente a esos órganos.

Esa misma Ley N°19.123 (en su artículo 24) y, por otro lado también la Ley N°19.992 (en su artículo 4°), establecen que las pensiones que regulan son compatibles con otros beneficios que pudieren otorgarse al respectivo beneficiario, lo cual puede válidamente interpretarse en el sentido que, por analogía, aquél puede eventualmente verse beneficiado con una indemnización como la concedida en la sentencia que se reprocha.

Asimismo, no debe perderse de vista que la responsabilidad del Estado en caso de violación de derechos humanos, deviene fundamentalmente de un estatuto normativo internacional que determina, como se dijo, la reparación “integral” del daño, por lo que no cabe confundirlo con las reglas reparatorias del derecho doméstico,



lo que conduce a concluir que la pretendida incompatibilidad que subyace en la argumentación de la apelante no es tal.

QUINTO: Que, por consiguiente, la legislación interna ha de ser interpretada conforme a los Tratados y Convenciones Internacionales aplicables a esta materia, no existiendo, por lo mismo, ninguna razón para denegar la indemnización del daño moral en sede jurisdiccional.

No cabe, así las cosas, hablar en la especie de la existencia previa de una reparación satisfactoria en relación al daño causado (y menos de pago), razón por la que, en concepto de esta Corte, la referida excepción que esgrimió el Fisco demandado en su contestación fue correctamente desestimada por el juez del a quo.

SEXTO: Que, por otro lado, tampoco puede prosperar la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios opuesta por el demandado, pues la reiterada jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito (véase, al efecto, entre otras, las sentencias dictadas en el Rol N° 20.288-2014, de 13 de abril de 2105; Rol N°1.424, de 1 de abril de 2014; Rol N°22.652, de 31 de marzo de 2015; Rol N°3975-16, de 29 de marzo de 2016; Rol N°15.402-2018, de 21 de febrero de 2019; Rol N° 29.448-18, de 27 de agosto de 2019; y Rol N° 23.093-19, de 20 de enero de 2020).

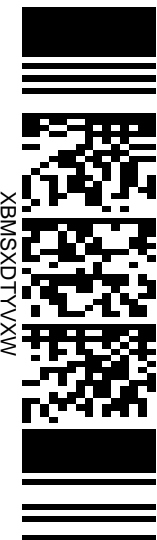


SÉPTIMO: Que, en fin, en lo que concierne a lo que el apelante denomina indemnización y quantum, explica diciendo que en el juicio no se acreditó el daño, que con la prueba documental solo da cuenta de la detención de la víctima y que la testimonial no resultó idónea para acreditar el daño y su magnitud, echa en falta algún peritaje psicológico o psiquiátrico medio de prueba idóneo para acreditar un hecho clínico como es el daño y fijar su monto.

Sobre el particular, debe tenerse presente que para resolver la controversia que en este caso gira en torno a determinar si el hecho ilícito establecido ha tenido la virtud jurídica de causar el daño que reclaman los actores, cabe tener en consideración que todo daño, incluso el daño moral, debe ser probado por quien lo reclama, puesto que en materia de responsabilidad civil el daño constituye un presupuesto para que ella se genere, de manera que si falta no hay responsabilidad. Por ello es que quien se asile en tal normativa, necesariamente debe acreditar todos y cada uno de sus supuestos, más aun cuando en este caso, no se trata de la víctima de tortura quien reclama su daño, sino que es su familia, como afectados por repercusión.

En tales condiciones, para que el daño sea indemnizable se requiere que sea cierto, esto es, que sea real y no hipotético, debiendo demostrarse esta circunstancia por los medios de prueba aceptados por la ley.

Así, los demandantes que aseveran la existencia del daño extrapatrimonial, por la tortura sufrida por su cónyuge y padre, son quienes deben acreditar que aquello les produjo sufrimientos físicos y psicológicos, sin ser suficiente para entender satisfecho tal deber la invocación de las características del hecho generador del daño, por cuanto tal aspecto se dirige más bien a la determinación de su magnitud y, consiguientemente, a su quantum, pero no a la finalidad probatoria perseguida, esto es, la de acreditar el perjuicio efectivo ocasionado.



Sobre el punto debe hacerse presente que la demandante efectivamente no allegó prueba idónea, para establecer la existencia del daño y su dimensión, no pudiendo desprenderse o presumirse en un caso como el presente, que el daño moral alegado se desprende del solo parentesco, siendo insuficientes los testimonios que se rindieron que sólo dan cuenta de los hechos de la detención y tortura del familiar de los actores, por lo que no existiendo pruebas que lo demuestren directamente, se revocara la sentencia en esta parte.

OCTAVO: Que, el último motivo de agravio postulado por el Fisco demandado se afincó en tachar como errónea la manera de cómputo de los reajustes e intereses otorgados respecto de la indemnización concedida, los que en la sentencia impugnada se fijaron acorde a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la sentencia y el pago efectivo y generará intereses corrientes desde la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo, de lo que se omitirá pronunciamiento atendido lo arriba resuelto.

II.- En cuanto a la apelación de la parte demandante:

NOVENO: Que, la demandante también dedujo apelación en contra de la sentencia, aduciendo como agravio, en resumen, que el monto que le fue otorgado en el fallo del a quo por concepto de indemnización de perjuicios, no se ajusta al dolor y sufrimiento que efectivamente le fue ocasionado a los demandantes; por ello solicitó su confirmación con declaración que se eleva el monto de la indemnización fijada a la suma de \$90.000.000, para cada uno, con costas.

DÉCIMO: Que, atendida la revocación del fallo que se ha decidido precedentemente, no corresponde hacerse cargo de las alegaciones de este recurso.



Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo que se dispone en los artículos 170 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Se revoca la sentencia apelada de fecha diecinueve de marzo del año dos mil veintidós, dictada por el 1° Juzgado Civil de Concepción, en los autos Rol N° C-1476-2020, caratulados “Alcarruz con Fisco de Chile”, en aquella parte que condenó al Fisco de Chile al pago de una indemnización de perjuicios por daño moral y se declara en su lugar que se rechaza de demanda por daño moral interpuesta en contra del Fisco de Chile por don Sergio Monsalve Alcarruz y doña Olga Alcarruz Oñate.

II.- Se confirma, en lo demás apelado, la aludida sentencia.

III.- Que cada parte soportará las costas del recurso.

Acordada contra el voto del abogado integrante Sr. Matus, quien fue de la opinión de revocar la sentencia en alzada para acoger la excepción de prescripción de la acción incoada, y en consecuencia rechazar la demanda en todas sus partes, teniendo únicamente presente en este caso han transcurrido sobradamente todos los plazos de prescripción que el Ordenamiento Jurídico establece para este tipo de acciones.

Redacción de la ministra suplente Claudia Vilches Toro y del voto disidente, su autor.

No firma la ministra suplente señora Claudia Vilches Toro, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia y retornado a su tribunal de origen.

Regístrese y devuélvase.

N°Civil-1043-2022.





XBMSXDTYXXW

Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministra Carola Rivas V. y Abogado Integrante Marcelo Enrique Matus F. Concepcion, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

